

Mesa N°49: Clases sociales y enfrentamientos en el origen, desarrollo y crisis del capitalismo en América Latina (siglos XIX-XXI).

Coordinadores: Harari, Fabián (UNSL) Roberto Muñoz (UNLP)

**La burguesía agropecuaria pampeana en la era Macri: política económica y reclamos corporativos, 2015-2019**

SANZ CERBINO, GONZALO  
CEUR-CONICET

**Introducción**

La burguesía agropecuaria pampeana, a través de sus entidades corporativas (Sociedad Rural Argentina –SRA-, Confederaciones Rurales Argentinas –CRA-, Federación Agraria Argentina –FAA-, y Confederación Interooperativa Agropecuaria –CONINAGRO-), asumió una intervención destacada en la arena política al menos desde 2008. Con el “conflicto del campo” de ese año, se posicionó como uno de los ejes de la oposición al gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. En vísperas del cambio de gobierno, en 2015, las distintas corporaciones se fueron posicionando como voceras del pedido de un cambio de modelo económico, y algunas de ellas, como SRA, explicitaron su apoyo al principal candidato opositor, Mauricio Macri, del frente electoral Cambiemos.

De hecho, frente al triunfo en las elecciones presidenciales del macrismo, todas las corporaciones agropecuarias celebraron el hecho como una victoria propia, ilusionadas con las promesas de campaña, en particular con la de eliminar los impuestos a la exportación de productos agropecuarios (las retenciones). Esto llevó a que, quienes han comenzado a estudiar el período, ubiquen a la burguesía agropecuaria pampeana y a sus corporaciones como uno de los pilares de la alianza que asumió el gobierno en 2015. De ello se deriva también que la política económica puesta en práctica desde ese momento resulta favorable a estas fracciones de la clase dominante. Este trabajo pretende poner en discusión algunas de estas ideas.

Con Macri en el poder, la relación con la burguesía agropecuaria no fue tan próspera como se auguraba. Las promesas iniciales se fueron dilatando y posponiendo. En particular, la de reducir la carga impositiva sobre el sector y eliminar progresivamente los impuestos a las exportaciones agropecuarias. Esto se tradujo en reclamos y

pronunciamientos, que en 2018 llegaron a su punto de mayor tensión, con la reimplantación de las retenciones y la reaparición de la Mesa de Enlace, el frente común integrado por las cuatro corporaciones rurales que protagonizó el conflicto de 2008. En esta ponencia, pretendemos reconstruir este derrotero, analizando la intervención política y corporativa de la burguesía agropecuaria pampeana entre 2015 y 2019, sus reclamos, su accionar y su relación con el gobierno de Mauricio Macri. Intentaremos dilucidar qué lugar ocupa esta fracción de la clase dominante en la alianza que detenta el gobierno y en qué medida se ve beneficiada por la política económica implementada.

### **La burguesía agropecuaria en campaña**

La fracción de la burguesía que más decididamente intervino de cara a las elecciones presidenciales de 2015 fue la agropecuaria. Con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, como vocero, el sector se encargó de dejar en claro que no había que votar al candidato kirchneristas, Daniel Scioli. Ya desde fines de junio de 2015, Etchevehere cuestionaba la “continuidad” de la fórmula del Frente para la Victoria con las políticas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: “En la medida en que no propongan algo distinto va a ser una política anti-campo la de los candidatos oficialistas”. A fines de julio, en la apertura de la exposición de Palermo, el presidente de la SRA volvió a la carga denunciando la continuidad entre la política agropecuaria kirchnerista y la del candidato oficial. Allí exigió a Scioli definiciones y señaló que “sería más que una mala noticia” que siga con las mismas políticas. En el acto se encontraba presente Horacio Rodríguez Larreta (candidato a Jefe de Gobierno por Cambiemos), que aprovechó la ocasión para pronunciarse a favor de eliminar las retenciones: “[es necesario] sacarle el pie que le pusieron en la cabeza al campo en estos diez años”.<sup>1</sup>

Algunos días después, cuando se realizó el acto formal de inauguración de la exposición de Palermo, Etchevehere fue mucho más duro. Allí, sin demasiados eufemismos, llamó a no votar por Scioli:

“Si sospecha que aquellos que usted está por votar mienten [en] las cifras que cuentan la inflación, la pobreza o el costo que tiene alimentarse siendo pobre, no los vote [...] Si el candidato participó o participa de algún proyecto político hegemónico que pretende terminar de llevarse por delante las instituciones de la Constitución [...] no los vote. No

---

<sup>1</sup>Ver <http://goo.gl/h4TOA7> y <http://goo.gl/dORNKv>.

vote dirigentes que pueden cometer actos de corrupción. Si alguno de ellos multiplicó su fortuna desde el ejercicio del poder, no los vote. Si usted cree que la lista que está por votar no respeta la libertad de expresión, no los vote. [...] Hay una segunda oportunidad, todavía es posible construir un país muy distinto al actual, donde las estadísticas no sean alteradas, los fiscales suicidados y dónde el vice no tenga su domicilio en un médano.”<sup>2</sup>

En el acto estuvieron presentes, en primera fila, Macri y Rodríguez Larreta, candidatos a presidente y jefe de gobierno por la principal fuerza opositora, el frente electoral Cambiemos. También se encontraban dirigentes massistas y delasotistas, y algún radical. Estos candidatos han sabido nutrir sus listas con dirigentes agropecuarios. Massa postuló a Eduardo Buzzi, ex presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), como precandidato a gobernador de Santa Fe, que terminó perdiendo la interna contra Oscar Martínez. En las PASO, De la Sota llevó a Carlos Garetto, ex presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), como candidato a diputado. Macri, por su parte, llevó a Néstor Roulet, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), como primer candidato al Parlasur por Córdoba. El dirigente de FAA, Alfredo de Ángeliz, fue el candidato a gobernador del PRO en Entre Ríos, e incluso el entonces presidente de SRA, Etchevehere, sonó como candidato macrista en la misma provincia.

El público en “La Rural”, sin embargo, entendió que el candidato del campo era uno solo. Movilizados por un discurso decididamente antikirchnerista, desde las tribunas cantaron “se siente, se siente, Mauricio presidente”. La dirigencia de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), CRA y CONINAGRO, presentes también en el acto, respaldó el discurso de Etchevehere, mostrando su alineamiento opositor. La única ausencia notoria en el acto fue la de Omar Príncipe, presidente de FAA, que, aunque no se pronunció abiertamente, fuentes periodísticas ubicaban cerca del candidato oficialista, Daniel Scioli. Sin embargo, FAA estaba internamente dividida: el ex presidente de la entidad, Eduardo Buzzi, y el del dirigente entrerriano Alfredo De Ángeliz, participaron de las elecciones nacionales como candidatos de distintos frentes opositores al gobierno kirchnerista.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>La Nación, 1/8/2015.

<sup>3</sup>Ver Clarín, 20 y 24/8/2015, <http://goo.gl/Jk9oHu> y <http://goo.gl/mUkdYR>.

Más allá de los matices, el grueso de la burguesía agropecuaria jugó un rol opositor en las elecciones presidenciales de 2015. Más de un dirigente corporativo, directamente, hizo campaña para Macri. El entonces candidato presidencial por Cambiemos prometía una “nueva relación” con el campo. Su principal promesa hacia el sector era eliminar los controvertidos impuestos a las exportaciones agropecuarias (las “retenciones”), en torno a los cuales se había desatado el conflicto de 2008 entre el “campo” y el gobierno kirchneristas. Las patronales agropecuarias depositaron sus esperanzas en el triunfo opositor, alentando en particular la candidatura de Mauricio Macri. Este romance ha llevado a muchos a creer que Macri gobernó en función de los intereses de la burguesía rural. Sin embargo, no podemos confundir las promesas de campaña con la política económica finalmente aplicada por el gobierno. Por eso nos preguntamos, ¿las expectativas del campo realmente han sido cumplidas?

### **El primer golpe**

Las demandas que tenía la burguesía rural antes de la asunción de Macri eran simples: eliminar las retenciones y “sincerar” (devaluar) el tipo de cambio.<sup>4</sup> Es decir, eliminar los mecanismos utilizados por el Estado para captar y redistribuir la renta de la tierra. En medio de una crisis fiscal como la que se atravesaba, eso implica no solo recortar la batería de subsidios y transferencias hacia la burguesía industrial, sino también aquella porción del gasto que beneficiaba a la clase obrera. Un ajuste que golpearía de lleno a los trabajadores. Macri respondió a la demanda con algunas medidas concretas y muchos “gestos”: la designación de un dirigente de CRA, Ricardo Buryaile, como Ministro de Agricultura, la presencia en la exposición rural de Palermo (a la que no iba ningún presidente desde 2001), la promesa “sacar el pie” de la cabeza de los productores... Pero no solo hubo promesas y gestos: las medidas que beneficiaron al campo no fueron menores. Se devaluó el dólar y se eliminaron por completo las retenciones al trigo, maíz, girasol y los productos regionales. Las retenciones a la soja se redujeron un 5% y se prometió, a partir de 2017, una baja de 5% por año hasta su completa eliminación.

Aunque la situación mejoró notablemente para la burguesía rural, las medidas estaban lejos de lo esperado por el agro. Las retenciones a la soja, que seguían en un 30%, no solo eran las más altas sino las más importantes en materia de recaudación. En ese sentido, Macri apenas “devolvió” una porción menor de esa riqueza que el campo

---

<sup>4</sup>Ver <https://goo.gl/Uxmy0V>, <https://goo.gl/JyRJKs> y <https://goo.gl/vxqpQX>.

considera suya. A su vez, las ventajas que traía la devaluación al campo eran transitorias, ya que si el tipo de cambio se mantenía fijo, la inflación iría horadando el margen de renta que quedaba para los productores primarios. Por esa razón, antes de cumplir los seis meses de gobierno Macri comenzó a recibir las quejas de la dirigencia rural. Hacia mayo de 2016 se multiplicaron los reclamos por los aumentos en los combustibles, que elevaban el costo de los fletes, los insumos y la contratación de servicios de maquinaria. El gobierno decidía así subsidiar a las petroleras autorizando subas en los combustibles por encima de los precios internacionales del petróleo, perjudicando al campo. La Sociedad Rural, en un comunicado, explicaba que el aumento “le comió al campo el beneficio de la rebaja de las retenciones”.<sup>5</sup>

La situación estaba lejos de conformar a la burguesía agropecuaria y eso se manifestaba en la multiplicación de reclamos. Las producciones regionales, que no gozaban de los beneficios de estar en la zona núcleo, llevaron la protesta a Plaza de Mayo de la mano de los “frutazos”, “verdurazos” y movilizaciones similares. Los tambos lograron ubicar sus reclamos en el discurso del presidente de la Sociedad Rural en Palermo, quien ese año le reclamó a Macri en persona por el problema. Los dirigentes corporativos aprovecharon cada oportunidad que tuvieron para protestar por los márgenes “desmedidos” que obtenían otros eslabones de la producción y la comercialización agropecuaria, como los supermercados, las aceiteras o las semilleras. Incluso, se han oído quejas contra la “voracidad fiscal” de los municipios, que aumentaban los impuestos al campo. Quien mejor ha expresado el sabor amargo que dejó ya desde el inicio la política agropecuaria macrista en la burguesía rural fue Gustavo Grobocopatel, que intentó erigirse en vocero del sector. A fines de julio de 2016, salió a poner en duda los supuestos beneficios que trajo para el campo el cambio de gobierno:

“El gobierno no tomó medidas en favor del campo. Lo que hizo fue despojar de medidas que no le permitían al campo aumentar su producción. Estábamos debajo del agua y las decisiones oficiales nos sacaron de esa situación para que sigamos respirando”.<sup>6</sup>

Más allá del descontento, aún se estaba lejos de una ruptura abierta entre el agro y el nuevo gobierno. En particular, el sector esperaba la concreción de ciertas promesas. En primer lugar, se aguardaba el inminente anuncio de la reducción de las retenciones a la

---

<sup>5</sup><https://goo.gl/Bx4KW0>.

<sup>6</sup><https://goo.gl/BlxLue>.

soja en 5 puntos para 2017, tal como Macri prometió al asumir su cargo. A su vez, se suponía que los planes de construcción de infraestructura, a mediano plazo, mejorarían sustantivamente la situación de algunas zonas marginales. Y por último, porque se esperaba que en marco del “diálogo” abierto con las corporaciones agropecuarias, cada reclamo puntual sería atendido.

El campo exigía “recuperar competitividad”, con una nueva devaluación, compensaciones para las producciones alejadas de la región pampeana y la definitiva eliminación de las retenciones que quedaban. Y como los recursos no abundaban, eso implicaría necesariamente una profundización del ajuste sobre los trabajadores y sobre la burguesía industrial. Sin embargo, las urgencias económicas y los compromisos del gobierno con otras fracciones de la clase dominante pesaron más. El 3 de octubre de 2016 Macri convocó a los dirigentes corporativos del agro a la residencia presidencial de Olivos para anunciar que en 2017 no bajarían las retenciones a la soja. A cambio, prometió comenzar a bajarlas a partir de 2018, de a 0,5 puntos mensuales. De esa manera, al finalizar su mandato, las retenciones a la soja llegarían al 18%. Muy lejos de la promesa de retenciones cero en 2019. Su excusa fue la crítica situación fiscal en la que encontró al Estado, que era peor a la que esperaban. Los dirigentes rurales se mostraron comprensivos. Luis Miguel Etchevehere, de la Sociedad Rural, cuestionó las retenciones pero señaló que entendían “la situación por la que atraviesa el país”. Dardo Chiesa, presidente de CRA, admitió que “el país está atravesando un momento complejo” y que hay que mantener un “equilibrio con otros sectores”. Tampoco hubo críticas de los dirigentes de FAA o CONINARGO. Parecía como que todos ellos sabían que, tarde o temprano, algo así finalmente iba a pasar...

Como a lo largo de casi toda la historia argentina, el agro pampeano financiaba con renta una estructura industrial escasamente competitiva, incapaz de subsistir sin subsidios y protección. Atada a esa estructura, se encontraba buena parte de la clase obrera argentina. Los reclamos del campo, que pretendían retener en el sector el conjunto de la renta de la tierra, implicaban realizar un ajuste feroz sobre el resto de la economía. El gobierno de Macri intentó avanzar con ese ajuste, mientras apostaba a aliviar sus efectos compensando con endeudamiento externo los recursos que se “devolvían” al campo. Sin embargo, se encontró con una serie de límites que impedían transitar a fondo por esa senda. Macri no podía ajustar tanto como la burguesía agropecuaria quería. En primer lugar, por el límite impuesto por la clase obrera, que ha

impedido que los despidos, el tarifazo y la baja salarial adquirieran la magnitud a la que en principio aspiraba el macrismo. En segundo lugar, por el límite impuesto por la propia burguesía industrial, que no podía prescindir de los subsidios que por distintas vías le proveía el Estado. Dado que el endeudamiento externo no adquirió la magnitud suficiente para financiar esa masa de gasto que el gobierno no pudo recortar, debió poner límites a cualquier mejora sustantiva en los recursos captados por la burguesía agropecuaria. Con el macrismo, el “campo” una vez más veía pospuestas sus principales aspiraciones. Como viene sucediendo desde hace décadas, cada gobierno arranca congraciándose con el campo (devaluación mediante), pero a poco de andar, vienen la decepción y la protesta. Ningún gobierno, por mucho que ajuste o se endeude, puede prescindir de la renta agraria. Así sucedió con Krieger Vasena, Martínez de Hoz, Menem y Kirchner. Como veremos, en este caso, había margen aún para que la relación de la burguesía agropecuaria con el gobierno que ella misma había impulsado se tense aún más.

### **Crecen las tensiones**

La decisión de posponer la rebaja de retenciones a la soja elevó las tensiones entre el gobierno y la burguesía agropecuaria. Si hasta 2016 había primado la moderación en la dirigencia corporativa rural, en 2017 la situación cambió, y eso se reflejó en los posicionamientos públicos de esta. Desde fines de 2017, Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, comenzó a amenazar con que la burguesía rural retomaría las protestas que en su momento pusieron en jaque al kirchnerismo. Uno de los detonantes fue el aumento del impuesto inmobiliario rural para 2018 en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Córdoba, muy por encima de la pauta inflacionaria oficial. Frente a ello, el dirigente ruralista amenazó: “vamos camino a una colisión”.<sup>7</sup> No era el único problema: según Chiesa, los costos no estaban cerrando, no solo en las zonas marginales sino también en la zona núcleo: “tenemos productores de Pergamino que me dicen que tienen problemas de rentabilidad. ¿Qué queda para el resto?”.<sup>8</sup> La combinación de impuestos elevados y atraso cambiario estaban reduciendo la rentabilidad agropecuaria, con lo que la renta diferencial comenzaba a escapar una

---

<sup>7</sup><http://bit.ly/2ksgXnA>.

<sup>8</sup><http://bit.ly/2xdBohd>.

vez más de las manos del agro. Por eso Chiesa sostenía que “necesitamos tocar el dólar o bajar los impuestos, para que [...] cierre la ecuación”.<sup>9</sup>

A los reclamos también se sumó Omar Príncipe, titular de la Federación Agraria (FAA). Desde enero de 2018 comenzó a insistir en que los “pequeños productores” no estarían en condiciones de afrontar la pérdida de rentabilidad y el aumento de las tasas de interés, por lo que exigía medidas de aliento para esta capa de la burguesía agropecuaria: “los productores de pequeña escala no tienen espaldas para seguir esperando políticas que los contemplen específicamente”.<sup>10</sup>

Como siempre sucede, son los productores de menor escala los primeros en sentir los efectos del avance sobre la renta, y los primeros en salir a protestar. Por esa razón, hasta ese momento la voz cantante la llevaron CRA y FAA, mientras que la Sociedad Rural mantuvo la diplomacia y aportó funcionarios al gobierno, como Luis Miguel Etchevehere, que luego de presidir SRA durante cinco años, asumió como Ministro de Agroindustria de la Nación. Pero esto no debe ser tomado como un síntoma de la continuidad de la luna de miel del agro con Macri. La historia muestra lo contrario: de Onganía a Menem, siempre sucedió lo mismo. CRA y FAA son los primeros en salir a reclamar, no solo por la escala de sus asociados, sino porque tienen una estructura territorial que les proporciona un contacto más directo con sus bases que a la Sociedad Rural. A las protestas por la caída de la rentabilidad suele seguir la movilización, a la que más tarde termina sumándose la Sociedad Rural.

Consciente del descontento creciente del campo, Macri improvisó un anuncio “positivo” en su discurso en ExpoAgro 2018, en marzo. Allí llevó dos medidas que anunció de forma confusa: la simplificación de trámites ante distintos organismos que serían reemplazados por una sola declaración jurada anual y facilidades crediticias para productores afectados por la sequía. Poco y nada. Distintas asociaciones rurales, en todo el país, salieron a cuestionar los anuncios. La voz cantante la llevó otra vez Dardo Chiesa. Señaló que los anuncios eran insuficientes y que la Ley de Emergencia Agropecuaria no servía para nada, porque no se actualizaban los montos de la ayuda a los productores afectados por los problemas climáticos. Además, insistió en que, más allá de la emergencia, había problemas de fondo que estaban reduciendo la rentabilidad del agro y que el gobierno no aportaba ningún tipo de solución. De mantenerse el atraso

---

<sup>9</sup><http://bit.ly/2KQoIyw>.

<sup>10</sup><http://bit.ly/2s7aQJq>.



cambiario, era necesario reducir los costos laborales y bajar los impuestos. No solo las retenciones, sino todos los impuestos que directa o indirectamente afectaban al agro: los impuestos inmobiliarios, los impuestos a los seguros y a los combustibles. En esa misma línea, cuestionó la reforma impositiva acordada a fines de 2017, que no resolvía ninguno de los problemas del agro: “La reforma impositiva dejó un sabor amargo y la reforma laboral que se avizora, corre el mismo destino, el cual, no soluciona el problema de fondo”. En suma, reclamó acelerar el ajuste, para que el sector rural dejara de financiar las deficiencias de la economía argentina. Por la vía de una devaluación que reduzca bruscamente los costos laborales, o mediante una mayor reducción del déficit que permita aliviar la presión impositiva sobre el sector. Lo que se encontraba en cuestión para Chiesa no era solo el “gradualismo” (el ajuste gradual del déficit público, política que Macri anunció al asumir), sino también el proteccionismo industrial, que Macri, como todos sus predecesores, mantenía:

“Hoy Argentina se debate entre la inflación, el déficit fiscal, el achicamiento estatal y el atraso cambiario. Es necesario retomar un debate postergado, en el cual, el gobierno parece haber perdido la iniciativa. El gradualismo defendido en razón de proteger los sectores más vulnerables, es justamente a quien termina perjudicando, si no es constante. Las políticas de shock generan efectos negativos en los sectores más relegados de la sociedad, pero si el gradualismo es lento, y no tiene convicción, termina bastardeando el proceso. No hay una muerte súbita, pero si hay una muerte lenta [...] Argentina debe definir si sigue o no con el sistema de sustitución de importaciones, su política de subsidios, quién paga y quién recibe.”<sup>11</sup>

No muy diferente era la posición de Federación Agraria. Aunque enfatizando en la necesidad de políticas diferenciales en favor de los pequeños productores, insistieron con lo mismo. La rentabilidad se reducía y aumentaba el endeudamiento de los productores, sin que el Estado diera respuestas. Frente a ello, se debían reducir los impuestos. En particular las retenciones a la soja, que deberían bajar en mayor medida para los productores de menor escala. La reforma tributaria también debía ser revisada, implementando una mayor progresividad en los impuestos. Según Omar Príncipe, en las asambleas zonales convocadas por FAA a principios de marzo, los asociados exigieron una movilización. A diez años de la 125, sostuvieron, el campo no tenía nada que festejar. Hasta la Sociedad Rural, en este contexto, endureció su discurso. Según su

---

<sup>11</sup><http://bit.ly/2IK1ii2>.

presidente, Daniel Pelegrina, en 2018 el campo estaba tributando más que antes de la reforma impositiva de 2017. Para aplacar la situación, proponían, sería conveniente acelerar el cronograma de reducción de retenciones a la soja. Este hecho era todo un síntoma del acelerado desgaste de la relación de Macri con el campo.

La devaluación de mayo de 2018, aunque obviamente trajo alivio a la patronal agropecuaria, que desde hacía meses reclamaba por los perjuicios del atraso cambiario, no fue visualizada como una solución de fondo. La devaluación se trasladaría tarde o temprano a precios y salarios, con lo que el problema persistiría. La única solución de fondo, en la que todas las corporaciones insistieron una y otra vez, era la reducción de los impuestos al sector, que solo sería posible si se aceleraba el recorte de gastos públicos y la eliminación de subsidios a la industria. Pero el gobierno no parecía dispuesto a avanzar por ese camino, que lo enfrentaría a la fracción más poderosa de la clase dominante argentina, la gran burguesía industrial. Por el contrario, echó a rodar el rumor de que el FMI, al que se recurrió para frenar la corrida cambiaria, presionaría por la reinstalación de las retenciones al trigo y al maíz, y que se evaluaba en esferas oficiales suspender la reducción de retenciones a la soja. Es claro que el gobierno lanzaba un globo de ensayo: estaba preparando el terreno para tomar medidas de ese tipo en un futuro no tan lejano.

### **La vuelta de las retenciones (y de la Mesa de Enlace)**

Con una estructura económica como la argentina, ningún gobierno puede prescindir de las transferencias de renta con las que financiar la maquinaria estatal y la industria ineficiente. En ese sentido, la promesa de Macri de eliminar las retenciones, como hemos señalado, resultaba incumplible. Si las transferencias no se materializaban vía atraso cambiario, lo harían de la mano de las retenciones. Y así sucedió: en la primera mitad de su mandato, mientras se mantenía el atraso cambiario, Macri fue bajando las retenciones, aunque a un ritmo menor al inicialmente prometido. Pero tras la gran devaluación de 2018, volvieron. En medio de la corrida cambiaria de mayo de ese año, el gobierno lanzó un globo de ensayo: se estaría estudiando frenar la baja de retenciones a la soja, y reimplantar los impuestos a la exportación de trigo y maíz. El “campo” entendió la señal y dio una rápida respuesta: las cuatro corporaciones agrarias (CRA, SRA, FAA y CONINAGRO), firmaron una carta conjunta solicitando una reunión al presidente Macri para despejar rumores. Dirigentes de CARBAP, el sector más crítico del gobierno, señalaron que de concretarse la medida constituiría una “traición” y que

las bases ya estaban presionando a la dirigencia agropecuaria para salir a las rutas.<sup>12</sup> Así reaparecía, aún informalmente, la Mesa de Enlace, el frente integrado por las cuatro corporaciones agropecuarias pampeanas que había impulsado el “conflicto del campo” en 2008.

Frente a esta reacción, el presidente Macri desmintió los rumores y reafirmó su intención de continuar con la baja de retenciones. Sin embargo, todas las promesas se derrumbaron en septiembre de ese año. Una nueva corrida cambiaría, y la presión para que cierren las cuentas fiscales, llevaron al gobierno a reimplantar las retenciones. Se implementó un gravamen fijo a las exportaciones primarias de 4 pesos por cada dólar exportado, lo que elevaba a 11% las retenciones a los productos que no tributaban, como trigo y maíz, y al 29% las retenciones a la soja, al sumarse la tasa fija a los impuestos vigentes para ese producto. El agro intentó evitar que se avance en este sentido haciendo público su descontento con el gobierno. En agosto, al cumplirse 10 años del voto “no positivo” de Cobos, que cerró con un triunfo momentáneo el “conflicto del campo”, realizaron un acto en el salón de la Rural en Palermo, que reunió a los dirigentes que protagonizaron el conflicto de 2008 y a los de la nueva Mesa de Enlace. El tema excluyente fue la crítica a las retenciones. Pero esto no amilanó al gobierno, que siguió adelante con el proyecto y terminó reimplantando las tan cuestionadas retenciones. Para CARBAP, el gobierno volvía a insistir con medidas que no funcionaron, y aunque plantearon que estaban dispuestos a hacer una contribución para que se supere la crisis, demandaron que el conjunto de la burguesía haga el mismo esfuerzo, en particular los que producían para el mercado interno y los popes de la obra pública. En su lectura, en las bases rurales “ya no hay más paciencia”. Los productores primarios estarían “desilusionados” con Macri e iba a ser difícil restablecer la confianza. Ya de por sí, la reaparición de la Mesa de Enlace, para un gobierno que buscó diferenciarse del kirchnerismo en su trato hacia el “campo”, era un gesto de gran significación política.

Pero CARBAP, la entidad más belicosa, tenía otra batalla por delante: hacia fin de año se votaría el presupuesto bonaerense, en donde se definiría el porcentaje de aumento de un cuestionado impuesto, el inmobiliario rural. Cuando el Ejecutivo provincial giró el proyecto para su tratamiento legislativo, dirigentes de CARBAP se plantaron frente a legisladores del oficialismo y de la oposición, exigiendo un recorte en los gastos

---

<sup>12</sup><https://goo.gl/vXs97Y> y <https://goo.gl/oMTvd5>.

provinciales y municipales para evitar recargar al agro con más impuestos. Allí no solo amenazaron con volver a movilizar a las bases agropecuarias, reinstalando el fantasma del conflicto de 2008. También insinuaron que retiraría el apoyo político al gobierno en un año electoral.<sup>13</sup> Esto se reflejó en las declaraciones de Matías de Velazco, presidente de CARBAP, quien apuntó que “se votó un cambio en la Argentina pero no se están viendo los cambios”, razón por la cual, el agro estaría buscando una “alternativa de poder”:

“El sector agropecuario no quiere volver al pasado pero está buscando una alternativa de poder, está buscando quién represente al campo. Está molesto por la pérdida de tiempo de haber confiado en un espacio político que no trajo las soluciones que se esperaban. Es muy grande la desilusión que hemos tenido y no sé si van a poder revertir la situación”.<sup>14</sup>

Quizás esta sea una de las razones por las que, de cara a las elecciones presidenciales de 2019, aparecieron candidaturas que se ubicaron a la derecha del Macrismo, como la de José Luis Espert o la de Gómez Centurión. En la medida en que el sector agropecuario, marcadamente liberal, se va desilusionando con la política económica del oficialismo, se va volcando a otros espacios en la compulsa electoral. Solo la amenaza de un retorno del kirchnerismo parece haber operado para que, al menos en el terreno electoral, Macri no termine de perder el apoyo de los sectores agrarios. De hecho, la reconstitución de la Mesa de Enlace, por ahora, no dio lugar a la reaparición de conflictos y movilizaciones protagonizados por el sector agropecuario. Aunque desde octubre de 2018 la Mesa de Enlace viene reuniéndose periódicamente, no han salido de allí cuestionamientos fuertes hacia el gobierno. Lo que no quita que, en caso de que Mauricio Macri sea reelegido al frente del Poder Ejecutivo Nacional, no tenga que enfrentar en poco tiempo su propio “conflicto del campo”. No se augura en el futuro inmediato un alivio para la situación económica argentina, ni la recomposición de las posibilidades de endeudamiento externo. Frente a ello, en la medida la gran burguesía industrial resista, apoyada en posibles movilizaciones obreras, una profundización del ajuste, la situación del agro (sea por efecto del atraso cambiario o de un aumento de las retenciones), se agravará. Y, de darse ese contexto, independientemente del signo político del partido en el gobierno,

---

<sup>13</sup><https://goo.gl/gkmLFn>, <https://goo.gl/SnJy7Z> y <https://goo.gl/RntTTT>.

<sup>14</sup><https://goo.gl/A6rURj>.

la burguesía agropecuaria se movilizará en defensa de un recurso, la renta diferencial de la tierra, que está en disputa.

### **De la ilusión al desencanto**

Como señalamos, la historia argentina reciente muestra que ningún gobierno, independientemente de sus discursos, sus promesas o del apoyo recibido del sector agropecuario, ha podido prescindir de la principal fuente de financiamiento de la economía argentina: la renta diferencial de la tierra. Incluso gobiernos que se identificaron con el liberalismo, y que han avanzado con un ajuste y el recorte del gasto público, han mantenido las transferencias de renta, por medio de impuestos a la exportación o a la tierra, o del atraso cambiario. Esto invariablemente ha llevado al enfrentamiento del sector agropecuario con cada uno de los gobiernos en los últimos 70 años, incluso aquellos que inicialmente recibieron su apoyo, como el de Onganía-Krieger Vasena en 1966, el de Videla-Martínez de Hoz en 1976 o el de Menem-Cavallo en los '90. Esto pone de relieve dos aspectos de las relaciones entre la clase dominante argentina y los referidos gobiernos. Por un lado, la marcada debilidad política de la burguesía agropecuaria frente a otras fracciones de la clase dominante. Su bajo grado de concentración, y su baja capacidad de generar empleo, se traducen en una debilidad política que la priva de capacidad de presión sobre el poder político. En contraste, la gran burguesía industrial, mucho más concentrada y contando con la fuerza que le da el ser la principal empleadora de mano de obra del país, cuenta con una capacidad de presión mucho mayor, que se refleja en su poder de presión sobre el poder político. Ambos sectores suelen actuar en alianza mientras son oposición, unidos por el cuestionamiento a las políticas “populistas” y el reclamo de un “ajuste”. Pero esa alianza se rompe cuando acceden al gobierno, porque la gran burguesía industrial impone sus intereses al gobierno de turno, poniendo límites al ajuste que demanda la burguesía agropecuaria. La exacción de renta, aunque inicialmente en niveles más bajos, se mantiene, porque con ello se financian los “privilegios” (protección y subsidios) que benefician a los grandes industriales, que no se “ajustan”. Esta historia, que viene repitiéndose desde hace 70 años, no ha sido muy diferente durante el gobierno de Mauricio Macri.

En la campaña presidencial de 2015, la burguesía agropecuaria se posicionó en favor de un recambio político e incluso algunos de sus dirigentes, como Luis Miguel Echevehere, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, dieron su apoyo tácito

a Mauricio Macri. La burguesía agropecuaria recibió con gracia al nuevo gobierno, que había prometido eliminar gradualmente los impuestos a las exportaciones primarias, principal foco de conflicto con el gobierno anterior. Sin embargo, a poco de andar, la relación comenzó a enturbiarse.

Macri recibió una economía en crisis. Afrontaba una crisis externa, porque los ingresos por exportaciones no alcanzaban a sostener la demanda de importaciones. Y una crisis fiscal, por el creciente déficit en los gastos del Estado. Sin embargo, emprender un ajuste drástico hubiera significado enfrentar una conflictividad social inmanejable, y ponerse en contra de uno de los sostenes de su alianza, la gran burguesía industrial, que dependía del auxilio del Estado vía protección y subsidios para mantener sus niveles de acumulación. Afrontó la encrucijada apelando al “gradualismo”, un programa de ajuste gradual, mientras se compensaba el déficit fiscal con endeudamiento externo. En ese primer momento pudo cumplir parcialmente con sus promesas hacia el agro: se eliminaron las retenciones a todos los productos, excepto la soja y se devaluó la moneda. Mientras tanto, el gobierno se comprometió a emprender una baja progresiva de las retenciones a la soja que las llevaría a cero al final de su mandato.

Sin embargo, las dificultades económicas lo obligaron a modificar el curso previsto. Las resistencias iniciales de la clase obrera y la gran burguesía industrial al programa de ajuste hicieron difícil reducir el déficit. El macrismo, como sus predecesores, resolvió la situación elevando la carga impositiva sobre el sector más débil de la clase dominante: se impuso el atraso cambiario, que operaba redistribuyendo la renta diferencial de la tierra hacia los sectores no exportadores, y pospuso el cronograma de reducción de las retenciones. Pero el golpe más duro llegó al tercer año del gobierno de Cambiemos, cuando por efecto de la crisis internacional, el gobierno se vio privado de los mecanismos de endeudamiento público y debió recurrir al salvataje del FMI. En ese contexto, se devaluó fuertemente la moneda y se aceleró el programa de reducción del déficit público. El sector agropecuario, una vez más, fue convocado a auxiliar a las finanzas públicas con el restablecimiento de las retenciones a todos los productos y el aumento en el renglón más importante, las retenciones a la soja. La burguesía agropecuaria, que venía manifestando su descontento desde 2016 con el curso económico seguido por el gobierno, dio un paso más: reeditó la Mesa de Enlace, que había protagonizado la conflictividad rural durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y amenazó con quitar su respaldo al gobierno, convocando a movilizaciones

de protesta. Aunque la coyuntura electoral pospuso la ruptura entre la burguesía agropecuaria y el gobierno, es de esperar que, si Macri es reelecto presidente en 2019, las tensiones entre el sector y el gobierno sigan escalando y el presidente deba enfrentar, al igual que su predecesora, su “conflicto del campo” en los próximos años.